

Protocolo
Actuación en Casos
que Involucren a
Personas Indígenas
Privadas de la Libertad

RESERVADO

“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 113 fracciones I y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 110 fracciones I, y V 113 fracciones I y III, 186 fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; en concordancia con los numerales Décimo Séptimo fracciones IV, VI, y último párrafo, Décimo Octavo y Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de versiones públicas; la información y documentación que se maneja es susceptible de ser considerada como reservada y de carácter confidencial”

Índice

Presentación	3
Marco Jurídico	6
Objetivos	7
Definiciones	8
Descripción Narrativa.....	9
Flujograma	11

Situación actual bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal

La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia publicada, el 18 de junio del 2008, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), implicó la transformación del Sistema de Justicia Penal mexicano. Esta reforma busca garantizar que las instituciones de seguridad e impartición de justicia operen con criterios homologados y conforme a un modelo acusatorio de justicia penal con apego a los derechos humanos.

En lo que se refiere al Sistema Penitenciario, el artículo 18 constitucional, sienta las bases para un cambio de régimen de ejecución de sanciones, transitando de un modelo positivista a uno de corte garantista. Este último organizado sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Asimismo, en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional mencionada, se instruyó el establecimiento de la legislación secundaria que dio forma a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), publicada en el DOF, el 16 de junio del 2016.

La LNEP establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regula los medios para lograr la reinserción social, de acuerdo con los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. En este sentido, la entrada en vigor de la LNEP plantea diversos retos que deberán ser atendidos por la Autoridad Penitenciaria, a fin de cumplir con el debido proceso penitenciario.

En el marco de la XXXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada el 21 de agosto de 2015, se generaron diversos acuerdos publicados el 5 de octubre de 2015 en el DOF, entre los que destaca el Acuerdo 09/XXXVIII/15, denominado “Fortalecimiento a la Política Nacional del Sistema Penitenciario”, el cual instruye a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el desarrollo de un Plan que fortalezca la Política Nacional del Sistema Penitenciario, contemplando seis acciones que garanticen la ejecución del mismo.

Una de esas seis acciones instruidas es el garantizar la operación bajo protocolos homologados que consoliden criterios de seguridad, organización y funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos humanos, conforme a las mejores prácticas internacionales y mediante la adopción de Procedimientos Sistemáticos de Operación (PSO) y protocolos de actuación.

Con todo lo anterior, se puntualiza que un aspecto central en materia de seguridad pública es lograr la plena coordinación entre los ámbitos federal y local. Asimismo, fortalecer la cooperación entre las instituciones encargadas de operar y de regir las acciones de los servidores públicos de seguridad pública a nivel nacional para el efectivo funcionamiento de los Centros Penitenciarios; respetando en todo momento los derechos humanos de la población interna.

La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario tiene como objetivo principal instituirse como el órgano de análisis, difusión e instrumentación de la política pública en materia penitenciaria con estricto apego a la legislación aplicable, tal y como se establece en sus Estatutos. Por lo anterior, la ejecución de estas actividades se realizará a través de protocolos homologados que permitan estandarizar la operación y administración de manera eficiente del sistema penitenciario.

En este marco, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP) celebró una Sesión Extraordinaria, el 1 y 2 de agosto de 2016, con el propósito de consolidar un modelo único para la implementación de la LNEP.

Uno de los acuerdos adoptados por la CNSP fue el 15/XIII/CNSP/SE/02/08/16, que instruye el establecimiento de un subcomité técnico para la mesa Modelo de Gestión, con la finalidad de elaborar los protocolos previstos en el artículo 33 de la LNEP.

En esa sesión también se aprobó la metodología para la elaboración de los protocolos, con base en la cual se presenta el siguiente *Protocolo Actuación en Casos que Involucren Personas Indígenas Privadas de la Libertad*; cuyo contenido está alineado al marco normativo vigente.

El presente protocolo es una parte fundamental para garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad. La conciencia de la identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos y personas a que se aplicará.

Instrumentos Nacionales

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Nacional de Ejecución Penal.
- Constitución Política de las entidades federativas, sus leyes, códigos, reglamentos, manuales y normas estatales aplicables.
- Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Instrumentos Internacionales

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Convención Americana de los Derechos Humanos.
- Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
- Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (*Reglas Mandela*).
- Tratados Internacionales aplicables en los que el Estado Mexicano sea parte.
- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Objetivos

Objetivo General

Describir las actividades mínimas que garanticen el respeto a los derechos humanos de la persona indígena privada de la libertad, en los Centros Penitenciarios.

Objetivo Específico

- Establecer los medios necesarios para que las personas indígenas privadas de la libertad puedan conservar sus usos y costumbres, dentro de las limitaciones naturales que impone el régimen de disciplina del Centro y que no padezcan formas de asimilación forzada, se menoscabe su cultura, o se les segregue.

Definiciones

Comité Técnico	Es el Órgano Colegiado Consultivo y de autoridad, que sustancia el procedimiento disciplinario de las personas privadas de la libertad, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Grupo o Pueblo Indígena	Es la comunidad de personas que conservan su identidad étnica con base en sus usos y costumbres.
Intérprete	Es la persona certificada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que habla y entiende la lengua madre de la persona indígena privada de su libertad para garantizar que entienda todo el proceso que se sigue en su contra, así como sus obligaciones y derechos.
Personal del Centro Penitenciario	Son las personas que laboran y realizan funciones de custodia penitenciaria, administrativas, jurídicas o técnicas en el Centro Penitenciario.
Titular o Responsable del Centro Penitenciario	Es la autoridad que administra, organiza y opera el Centro Penitenciario.
Usos y costumbres	Son las tradiciones no escritas, transmitidas de generación en generación, propias de una comunidad indígena, con los límites que impone el régimen disciplinario del Centro Penitenciario.

Las definiciones anteriores son para uso y entendimiento de este protocolo.

Descripción Narrativa

Durante la Actuación en Casos que Involucren Personas Indígenas Privadas de la Libertad

1. El personal del Centro Penitenciario, desde el ingreso de una persona indígena privada de la libertad identifica la pertenencia a algún grupo o pueblo indígena a la persona indígena privada de la libertad y si comprende y/o se puede hacer comprender en idioma español.
2. El Titular o Responsable del Centro solicita un intérprete a la autoridad corresponsable (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), en caso de que la persona indígena privada de la libertad lo requiera.
3. El personal del Centro Penitenciario le informa a la persona indígena privada de la libertad, ya sea con el apoyo de un interprete o con los medios que estén a su alcance, las acciones a seguir para su ingreso, así como sus derechos y obligaciones.
4. El personal del Centro Penitenciario realiza el trámite de ingreso de la persona indígena privada de la libertad, de acuerdo con la normatividad vigente.
5. El Comité Técnico, en su caso, ubica a la persona indígena privada de la libertad en celdas donde habiten otras que pertenezcan a su mismo grupo indígena o que compartan usos y costumbres similares, de conformidad con las disposiciones aplicables.
6. El Comité Técnico desarrolla el plan de actividades con la participación de la persona indígena privada de la libertad, procurando que conserve sus usos y costumbres, siempre que no se contrapongan al régimen disciplinario del Centro Penitenciario.

En caso de que se defina en el plan de actividades la necesidad de cursar educación básica, la misma debe ser bilingüe y acorde a la cultura de la persona indígena privada de la

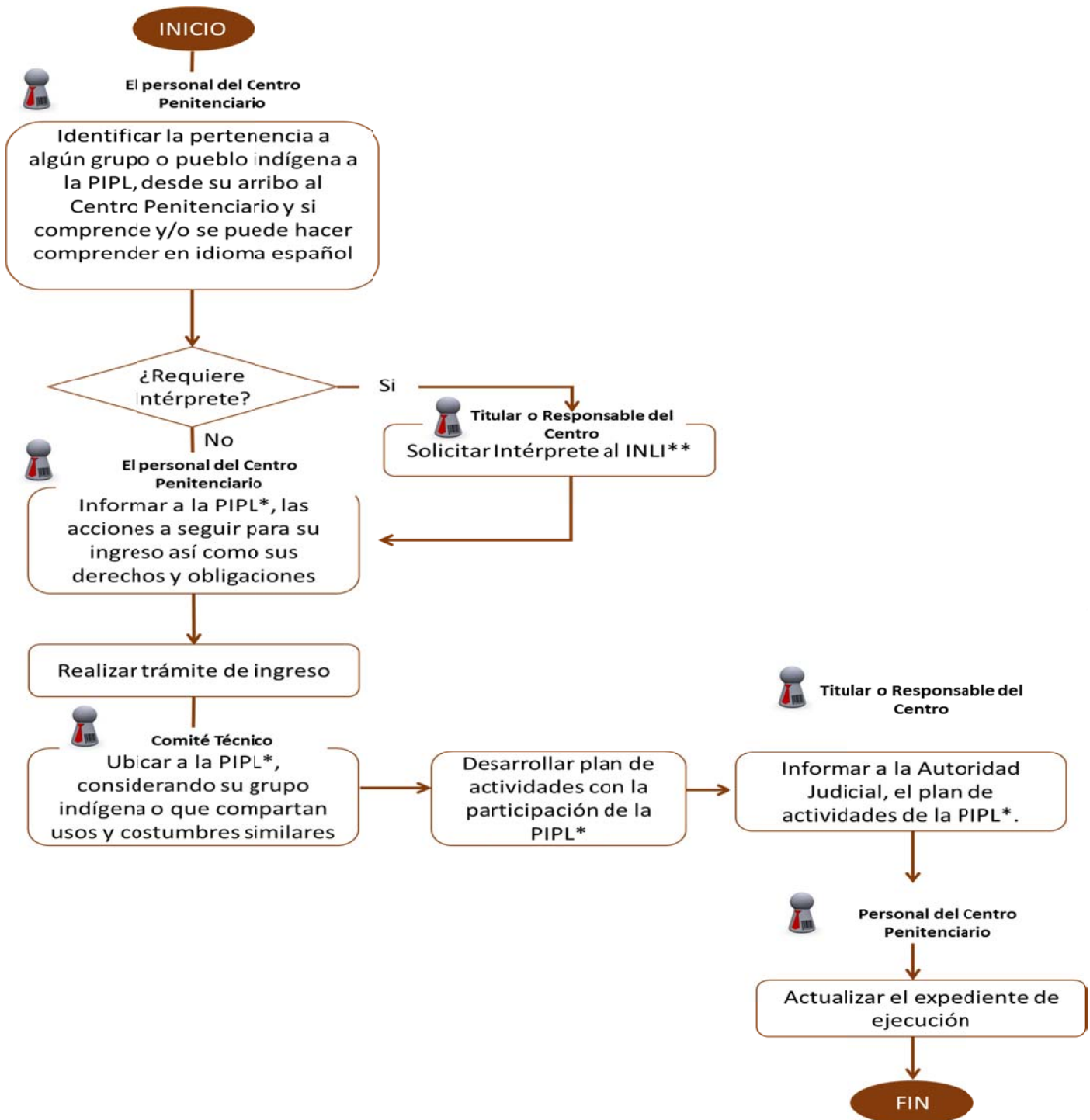
libertad, por lo que se gestiona ante la Secretaría de Educación Pública o sus homólogas en las entidades federativas que el servicio sea prestado por maestros o profesores que comprendan su lengua.

7. El Titular o Responsable del Centro informa a la Autoridad Judicial correspondiente, el plan de actividades de la persona indígena privada de la libertad.

**Después de la Actuación
en Casos que Involucren
Personas Indígenas
Privadas de la Libertad**

8. El personal del Centro Penitenciario actualiza el Expediente de Ejecución Penal de la persona indígena privada de la libertad, respecto a los servicios prestados.

Flujograma



*PIPL: Persona Indígena Privada de la Libertad.

**INLI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas